En San Miguel de Tucumán, a 12 de Marzo de dos mil dieciocho, reunidos los señores Jueces de la Excma. Corte Suprema de Justicia que suscriben, y

VISTO:

El Expte. de Secretaría de Superintendencia N° 1917/2017 “Impugnación concurso de abogados -Oficina de Asistencia a la Víctima de delitos- Acordada N° 1655/2016”; y

CONSIDERANDO:

I) El recurso interpuesto a fs. 1 y 2 por los participantes del concurso, y lo alegado en fecha 13 y 20 de septiembre respectivamente por los concursantes que han superado la prueba de oposición.

II) Los argumentos expuestos por los concursantes que aprobaron el concurso no resultan ajustados a los hechos, en virtud que debe tenerse presente que la impugnación de fs. 1 y 2 no versa sobre el Temario propuesto en Anexo, sino que señala la falta de congruencia entre el temario aprobado por Acordada N° 1.655/16 y el cuestionario que debieron contestar confeccionado por el jurado. Por ello, lo que esta Corte considera en el presente es la pertinencia de las preguntas de examen a partir de haber tomado conocimiento del cuestionario recurrido por los concursantes.

III) Si bien resulta atendible lo argumentado por los concursantes que aprobaron la prueba de oposición en el sentido que las convenciones

internacionales atacadas por los recurrentes de fs. 1 y 2 deben entenderse incluidos en el concurso, pues la enumeración del Anexo B de Acordada N° 1655/16 es ejemplificativa y no taxativa (...“Instrumentos internacionales sobre derechos humanos vinculados a los derechos de las víctimas, entre ellos...”), debe destacarse que las preguntas versaron sobre dos instrumentos que no figuran en el Anexo citado, y sí se encuentran consignados expresamente en el Anexo B de Acordada N° 1460/16.

IV) Ahora bien, analizando el total de preguntas del examen (56), estas pueden ser clasificadas de la siguiente manera:

IV. 1- La cantidad de 34 preguntas responden al temario del presente concurso, a saber:

-Sobre Proceso Penal: veintinueve (29) preguntas (identificadas con los números 1, 3, 38, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74).

-Sobre Proceso Civil: una (1) pregunta (medida cautelar- número 4).

-Sobre Código Penal: una (1) pregunta (identificada con el numero 30).

-Sobre Pronunciamientos de la CIDH: tres (3) preguntas (número 19, 41 y 56).

IV.2- Las 22 preguntas que refieren específicamente al temario del concurso convocado por Acordada N° 1460/2016 - Concurso de Oficina de Violencia Doméstica (OVD)-, pueden clasificarse de la siguiente manera:

-Sobre Ley N° 7264 - Régimen de Protección a la víctima de Violencia Familiar: diez (10) preguntas (identificadas con los números 5, 12, 22, 28, 31, 37, 39, 44, 49, 50).

-Sobre Ley 26.485- Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus

relaciones interpersonales”, y Ley Provincial N° 8336: tres (3) preguntas (identificadas con los núm. 6, 7, 34).

-Respecto a la “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o CETFDCM (también conocida por sus siglas en inglés CEDAW): cuatro (4) preguntas (identificadas con números 26, 27, 33 y 48).

-Sobre la “Convención de Belem dó Pará”: tres (3) preguntas (las números 24, 29 y 42).

-Sobre OVD: dos (2) preguntas (números 18 y 20).

Sin perjuicio de tratarse de materia también vinculada a la competencia de la oficina de asistencia a la víctima, debe tenerse presente que no resulta la única materia particular en la que entenderá este órgano.

V) Por último, no se advierte en el cuestionario ninguna pregunta específica sobre el contenido de la Ley Provincial N° 7.867 de Asistencia a la Víctima. Allí la inconveniencia del temario detectada por esta Excma. Corte, ya que lo que se pretende en el presente concurso es contar con funcionarios que conozcan -en primer término- sobre la materia específica de la competencia atribuida al órgano para el cuál se concursa el cargo, además de lo considerado supra.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 13 de la ley Orgánica del Poder Judicial;

ACORDARON:

I.- DEJAR SIN EFECTO el Concurso Público de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo de Secretario Judicial B (categoría 8.01) -

Abogado- Director de la Oficina de Asistencia a la Víctima de Delitos,
convocado por Acordada N° 1.655/16, atento a lo considerado.

II.- NOTIFÍQUESE.

Con lo que terminó, firmándose por ante mí, doy fe.

Daniel Oscar Posse

(con su voto)

René Mario Goane

Antonio Gandur

(en disidencia)

Antonio Daniel Estofán

Claudia Beatriz Sbdar

Ante mí:

María Gabriela Blanco

VOTO DEL SEÑOR PRESIDENTE, DR. DANIEL OSCAR POSSE:

Comparto lo resuelto en el presente Acuerdo, pero con las
siguientes consideraciones y agregados:

Que en este momento estamos en instancia de analizar el recurso presentado, que de ser atendible, implicaría una re-edición de un concurso para cubrir el cargo de coordinador/a de esta Oficina de Atención a la Víctima.

Respecto de la cuestión relativa al concurso, entiendo que puede ser dejado sin efecto, en atención a las preguntas realizadas y a la pertinencia respecto del temario presentado. Coincido en este sentido con la opinión mayoritaria de esta Excma. Corte en dejar sin efecto el concurso.

Asimismo, considero que no se debe generar un nuevo examen. El principal motivo es que entre el llamado al concurso y hoy ha sobrevenido una cuestión no menor respecto de la dependencia de la Oficina de que se trata.

Mi principal fundamento es que dicho Concurso fue llamado por Acordada N° 1.655/16, cuando la Oficina de Atención a la Víctima estaba siendo planeada en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, cuestión que se vio modificada posteriormente por sucesivas reformas legales y por la Acordada N° 845/17, en donde se decide expresamente que permanezca bajo la dependencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia. De hecho, los cargos que pensaban cubrirse fueron determinados en la órbita del mencionado Ministerio Público.

Es decir que tenemos un Concurso no concluido y una modificación del lugar u órbita de dependencia institucional del espacio al que el Concurso se refiere. Por esta razón, considero posible y pertinente que se adopte la decisión de dejar sin efecto el Concurso mencionado por los motivos expuestos. Atento a que no ha configurado derechos para ningún participante, no tiene mayores costos para el Poder Judicial por no estar concluido el

proceso. Y la razón principal para tomar esta decisión es que los antecedentes que se tuvieron en cuenta para convocar dicho Concurso han variado al punto tal que los cargos que estaban llamados a cubrir, conforme la ley de presupuesto, estaban asignados al Ministerio Público Fiscal, Pupilar y de la Defensa y allí quedaron, conforme consta en fs. 3 del Expte. N° 1.326/17.

Ahora, también existe la necesidad de tener una Oficina que atienda a las víctimas del delito. En relación a esto, adelanto que no considero oportuno generar una superestructura bajo la órbita de esta Corte y, por el contrario, apuntalar una arquitectura institucional lo más racional y coordinada posible.

Por ello, adelanto que es mi opinión no generar una nueva dependencia dentro de la Corte Suprema de Justicia sino re-direccionar esta tarea a una Oficina ya creada y en funcionamiento. Atendiendo el objetivo que esta tendría, entiendo estratégico potenciar la Oficina de Derechos Humanos y Justicia. Tal como esta Corte ya lo hizo en el caso de la Dirección de Estadísticas con la Oficina de Gestión Judicial, mediante Acordada N° 784/2015.

Son dos las razones que considero de peso en esta dirección. Por un lado, la Oficina de Derechos Humanos y Justicia, desde octubre de 2016, se desempeña como referente institucional para las víctimas del delito por decisión del Dr. Gandur, cuando ejercía la Presidencia de la Corte.

Esta Oficina, conforme se encuentra acreditado por sus sucesivos informes de trabajo, con mucho esfuerzo ha logrado realizar dicho acompañamiento y contener esta demanda, aunque no lo ha hecho de manera proactiva (ya que no tiene personal adicional para atender la demanda), sino

más bien reactivamente. De hecho, este dato fue presentado a la Honorable Legislatura como relevante al momento de hacer la consulta.

Es claro que por este recorrido, ese espacio institucional ya se encuentra referenciado entre las víctimas y podría potenciar su servicio si contara con los recursos humanos e institucionales necesarios.

En segundo lugar, es el espacio creado por esta Corte para fortalecer el acceso a la justicia, en especial de los grupos vulnerables, y a la vez para investigar las prácticas que obstan a esto. Esta misión se verá alimentada por el trabajo con las víctimas, cuyas demandas son una fuente de información constante sobre los aspectos a tener en cuenta para mejorar el acceso a la justicia, dado que sus necesidades se presentan como material de trabajo, reflexión y conocimiento del funcionamiento institucional del Poder Judicial.

Por ello, recomiendo que esta Corte deje sin efecto el Concurso convocado por la Acordada N° 1655/2016, esgrimiendo los motivos antes expuestos. A la vez, establezca que, en función de lo decidido por la Acordada N° 845/17 y en el marco del art. 13, será la Oficina de Derechos Humanos y Justicia la que tendrá a su cargo la Oficina de Atención a la Víctima del Delito. Y, frente a esto, encomiende a que la responsable de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia organice, junto con la Dirección de Recursos Humanos, el Concurso por el cual se cubrirá el cargo del abogado o la abogada que se destinará a realizar esta tarea, que se sumará a las personas de otras disciplinas que ya fueron nombradas y que se encuentran contratadas para ello, sin cumplir dicha función.-

////////////////////////////////////

Daniel Oscar Posse

DISIDENCIA DEL SEÑOR VOCAL, DR. ANTONIO GANDUR:

I.- Que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán decidió mediante Acordada N° 1.655 del 22 de diciembre de 2016 "I.- APROBAR la reglamentación aplicable al presente Concurso Público (Anexo A), que forma parte integrante de esta acordada, y el temario (Anexo B), que deberán ponerse a disposición de los postulantes en la página web del Poder Judicial. II.- DISPONER el llamado a Concurso Público de Oposición y Antecedentes para cubrir un (1) cargo de Secretario Judicial B (categoría 8.01) - Abogado, quien revestirá el cargo de Director de la Oficina de Asistencia a la Víctima de Delitos. III.- ESTABLECER que la convocatoria para la inscripción en el concurso se realice a través de la página web del Poder Judicial desde el 28/12/2016 al 29/12/2016 inclusive. IV.- DISPONER que la Dirección de Recursos Humanos tendrá a cargo el contralor de la prueba y adoptará las decisiones pertinentes antes y durante el desarrollo de la misma. V.- DISPONER que la Dirección de Sistemas tendrá a cargo el proceso de inscripción y confirmación de turnos, según especificaciones indicadas en el Anexo A de la presente Acordada y la instalación, mantenimiento, soporte y operatividad de los equipos y sistemas destinados a los concursos. VI.- DISPONER que a los fines de la realización de los Concursos Públicos, la Dirección de Recursos Humanos podrá solicitar a Presidencia de esta Corte

Suprema se afecte el personal de las oficinas que estime pertinente para la mejor prosecución del trámite. VII.- NOTIFICAR y publicar en sitio de la página Web del Poder Judicial y en el Boletín Oficial de la Provincia, por dos días sin cargo y difundir en medios de prensa escritos y audiovisuales".

Cumplidas las etapas pertinentes, se llevó a cabo el examen escrito de oposición correspondiente al Concurso 12/2016. Rendidas las pruebas y entregados los resultados, Juan C. Leguizamón, José Rubén Zingale, Franco Medina, Joaquín A. Peralta, José M. Rasguido, Guido Díaz, Guillermo Vargas Aignasse, Claudia Boyanovsky, Bernardo J. Lobo Bugeau y Pablo Gustavo Caram impugnaron el examen en la inteligencia de que se había basado en tópicos no incorporados al temario. Atento al tenor de sus presentaciones, fueron rechazadas por ser manifiestamente improcedentes.

II.- Que, disconformes con el rechazo de las impugnaciones, Jorge Rubén Zingale, Pablo Gustavo Caram, Franco Medina, Guido Alberto Díaz Alvillos, Bernardo Lobo Bugeau, José Maximiliano Rasguido, Joaquín Olaizola y Juan Carlos Leguizamón dedujeron recurso de reconsideración, aduciendo que resultaba arbitrario y violatorio del debido proceso. Más en concreto, aseveraron que "no impugnamos por el solo hecho de no haber alcanzado el puntaje mínimo establecido, sino porque no se midió la idoneidad específica para la oficina en cuestión". Sobre esa plataforma, solicitaron que "oportunamente se haga lugar al presente recurso y se disponga retrotraer el concurso a la etapa anterior al examen".

Frente a ello, se corrió traslado de la impugnación a Walter Mejía, Carlos Gustavo LloveraNaufe y Pedro Miguel Costaz, por ser los postulantes que aprobaron el examen escrito de oposición. Al respecto, requirieron "...el

rechazo del planteo impugnatorio por ser improcedente, extemporáneo, contrario a la teoría de los actos propios, especulativo, y dilatorio. En consecuencia corresponde continuar con el procedimiento del presente concurso fijándose fecha para la realización de entrevistas a los postulantes debidamente aprobados".

III.- Que en el marco del examen de admisibilidad del recurso de reconsideración cabe indicar que la decisión en crisis ha sido notificada el 3 de marzo de 2017 y que el planteo fue incoado ese mismo día. En ese sentido, de conformidad con lo prescripto en el art. 63 de la Ley N° 4.537, ha sido interpuesto en tiempo y debida forma.

IV.- Que de la confrontación del recurso de reconsideración con la decisión cuestionada y el derecho aplicable al caso, es factible anticipar que el planteo debe ser rechazado.

Es que los instrumentos vinculados a la violencia de género y la violencia doméstica se encontraban incluidos en el temario del examen y constituyen un eje central de la función que cumplirá la Oficina de Asistencia a la Víctima de Delitos.

En ese orden, es preciso destacar que el temario incluía, entre otros puntos, el Código Penal (establece en su art. 80, inc. 11, que se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua al que matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género), el Código Procesal Penal de la Provincia de Tucumán (prescribe en el art. 5 bis, in fine, que el Fiscal no podrá disponer de la acción penal cuando apareciere como un episodio dentro de un contexto de violencia doméstica o motivada en razones discriminatorias) y pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia

de Tucumán (en su sentencia N° 329 del 28 de abril de 2014 analizó los instrumentos que incorporaron la perspectiva de género, por cuanto es necesario reproducirlos a los fines de promover su conocimiento, comprensión y aplicación).

Sobre esa plataforma, resulta por demás evidente que los instrumentos vinculados a la violencia de género y la violencia doméstica estaban incorporados al examen. Mucho más cuando -también- se incluyeron otros tópicos que abordan la materia: pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, leyes provinciales vinculadas a la protección de la víctima y una enunciación no taxativa de instrumentos internacionales sobre derechos humanos vinculados a los derechos de las víctimas.

Para concluir, no es posible soslayar que el examen tomado en base al referido temario fue aprobado perfectamente por otros postulantes, dejando concluir que el tópico pudo ser estudiado. Precisamente, cabe destacar que los postulantes aprobados sostuvieron que "estas acciones (rendir, no oponerse, suscribir el resultado del examen,) convalidaron indudablemente el acto administrativo cerrando cualquier posibilidad impugnativa".

V.- Que, de conformidad con los argumentos explicitados, corresponde no hacer lugar al recurso de reconsideración deducido por Jorge Rubén Zingale, Pablo Gustavo Caram, Franco Medina, Guido Alberto Díaz Alvillos, Bernardo Lobo Bugeau, José Maximiliano Rasguido, Joaquín Olaizola y Juan Carlos Leguizamón contra el rechazo de las impugnaciones del examen escrito de oposición llevado a cabo en el marco del Concurso 12/2016

(Secretario Judicial B (categoría 8.01) - Abogado - Oficina de Asistencia a la Víctima de Delitos - Centro Judicial Capital).

Por ello, voto por NO HACER LUGAR al recurso de reconsideración deducido por Jorge Rubén Zingale, Pablo Gustavo Caram, Franco Medina, Guido Alberto Díaz Alvillos, Bernardo Lobo Bugeau, José Maximiliano Rasguido, Joaquín Olaizola y Juan Carlos Leguizamón contra el rechazo de las impugnaciones del examen escrito de oposición llevado a cabo en el marco del Concurso 12/2016 (Secretario Judicial B (categoría 8.01)) - Abogado - Oficina de Asistencia a la Víctima de Delitos - Centro Judicial Capital), según lo considerado.-

Antonio Gandur

Ante mí:

María Gabriela Blanco